

Argentina, más allá de la coyuntura

Germán Ríos

El país tiene dos retos urgentes: pagar la deuda y luchar contra la pobreza. El problema es que no puede afrontar ambos a la vez.

ARGENTINA es un país con un enorme potencial. Cuenta con una extensión territorial de 2,78 millones de kilómetros cuadrados –el octavo país del mundo– y tierra fértil para producir alimentos y dar de comer a más de 400 millones de personas. Dispone de recursos energéticos abundantes –solo en Vaca Muerta se encuentran las segundas reservas mundiales de gas de esquisto– y su capacidad de producción de energías renovables es inconmensurable. Junto con Bolivia y Chile comparte uno de los recursos más importantes para la industria electrónica: litio. Disfruta

aún del bono demográfico y, pese a problemas en la calidad de la educación, tiene una mano de obra preparada, emprendedora y con gran capacidad de adaptarse a los cambios. Con todos estos factores a su favor, el desempeño económico de Argentina en la última década ha sido decepcionante.

El nuevo gobierno del país, liderado por Alberto Fernández, afronta una coyuntura económica compleja y cuenta con poco margen de maniobra. A corto plazo, Argentina deberá negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Acuerdo Stand-By a 36 meses, aprobado el 20 de junio de 2018, y reprogramar el esquema de pagos a la institución. Al mismo tiempo, las autoridades deberán comenzar un proceso de renegociación con el resto de acreedores,

Germán Ríos es profesor de Economía en IE University y socio en Atrévía.

sobre todo privados. Todo ello en un contexto internacional difícil –guerra comercial entre EEUU y China, crecimiento global débil e incertidumbre sobre los mercados financieros internacionales– que aumenta los riesgos económicos del país.

El objetivo principal de Argentina debería ser alcanzar un acuerdo con los acreedores, con el apoyo del FMI, para perfilar de nuevo la deuda, incrementando los plazos de amortización y probablemente manteniendo las condiciones iniciales negociadas en términos de capital, monedas y tasas de interés. Podría replicarse un esquema similar al utilizado por Uruguay después de la crisis de 2002. En caso de que no se llegara a alcanzar un acuerdo de estas características, la alternativa sería un nuevo incumplimiento de la deuda con consecuencias muy negativas para la economía argentina, lo que llevaría al país por un camino de mayor inestabilidad e incertidumbre.

No se puede dejar de lado la difícil situación que afronta la población, con una tasa de pobreza en torno al 40%. Por tanto, será clave equilibrar los ajustes económicos, en especial los fiscales, con una activa política social. En el escenario ideal, Argentina lograría un acuerdo con el FMI y el resto de acreedores, comenzaría un ajuste macroeconómico –sobre todo en el frente fiscal, para corregir el déficit y hacer sostenible la trayec-

toria de la deuda pública– y conseguiría margen presupuestario para la política social. Esto sería condición necesaria para diseñar e implementar políticas de medio y largo plazo con énfasis en mejoras en la productividad y un crecimiento económico inclusivo que genere empleos de calidad, contribuya a reducir la pobreza y permita generar recursos para cumplir con los compromisos externos y estabilizar las cuentas fiscales.

AJUSTES Y ESTÍMULOS

EN la gestión de la deuda pública externa, una opción interesante para Argentina –y de la que habló Fernández durante la campaña electoral– es el ya mencionado modelo de reestructuración de la deuda uruguaya. En ese caso, el gobierno uruguayo ofreció dos alternativas a los acreedores: una ampliación de plazo de cinco años manteniendo el capital, los intereses y la moneda de emisión original, y una opción de canje por bonos con distintos rangos de vencimientos, jurisdicciones y monedas. Dependiendo de la opción elegida, los tenedores de bonos podían recibir hasta un 15% del valor de la deuda en efectivo.

Para que un mecanismo similar funcione en Argentina, es importante la colaboración del FMI, un proceso de consulta con los acree-

dores y que las propuestas de reestructuración y canje sean lo suficientemente atractivas para evitar la estrategia de los *holdouts* o fondos “buitre”.

Si se alcanzan los acuerdos, tanto con el FMI como los acreedores, Argentina deberá afrontar un duro

«Los niveles de gasto público son elevados para estándares latinoamericanos y no guardan relación con el ingreso per cápita de Argentina»

ajuste fiscal. El gasto público primario pasó del 22% del PIB en 2002 a cerca del 40% en la actualidad. Estos niveles de gasto son elevados para estándares latinoamericanos y no guardan relación con el ingreso per cápita del país. La fuerte expansión del gasto público se explica por el incremento de los salarios de los funcionarios públicos, el aumento de los beneficios previsionales y las ayudas a los servicios públicos, de las que una parte comenzaron a reducirse

durante la presidencia de Mauricio Macri. Dada la magnitud de los problemas sociales, la reducción del gasto público deberá hacerse mediante la búsqueda de eficiencias, la reducción de ayudas, reorientar gastos superfluos hacia los programas de asistencia social y trabajar muy de cerca con las provincias para llegar a acuerdos de estabilidad fiscal a medio y largo plazo.

Al igual que en otros países de América Latina, existe una importante brecha de productividad entre Argentina y los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De hecho, las magras ganancias en la productividad argentina proceden más de la acumulación de factores de producción que del aumento de la productividad total de factores. Es clave para el futuro del país generar ganancias de productividad, y para ello son necesarias fuertes apuestas en educación y formación para el trabajo, inversión en infraestructuras productivas y mejoras en la gestión logística, además de fomentar la innovación y la adopción de nuevas tecnologías.

Mención especial merece la inversión en infraestructuras y logística, debido al impacto que tiene sobre el coste de producción del sector privado. El problema es que dadas las restricciones fiscales y de financiación, será muy difícil que la inversión

pública contribuya a cerrar brechas en infraestructuras. Por tanto, sería interesante explorar mecanismos alternativos de financiación donde el sector privado pueda participar en obras claves de infraestructura a través de esquemas de participación público-privada. Valdría la pena estudiar las experiencias de Colombia, Uruguay y Brasil, donde a través de vehículos de financiación específicos se han movilizado importantes recursos del sector privado para financiar infraestructuras productivas. Para esto, se necesita un entorno de negocios favorable, transparencia y estabilidad de las reglas de juego.

Respecto a la educación, a pesar de que en los últimos 20 años ha habido importantes avances en términos de cobertura, persisten problemas de calidad, sobre todo en secundaria. Según el último Observatorio de Argentinos por la Educación, en pruebas estandarizadas solo tres de cada 10 estudiantes de secundaria obtienen un resultado satisfactorio en Matemáticas, mientras que en Lengua la proporción es el doble. Es necesario un esfuerzo importante para incrementar la calidad de la educación secundaria y preparar a los estudiantes tanto para el mercado laboral –a través de programas de educación dual– como para continuar hacia la educación superior. Como en otros países de América Latina, hay grandes diferencias entre la calidad de la

educación pública y la privada, y entre las escuelas urbanas y las rurales. Las mejoras de calidad en todo el sistema también contribuirían a reducir las desigualdades en la educación que, a posteriori, se perpetúan en el mercado laboral.

Otra área de trabajo debe ser el diseño e implementación de políticas públicas que fomenten la investigación, el desarrollo y la innovación en las empresas, con la finalidad de aumentar su productividad y competitividad. Algunos elementos claves para el fortalecimiento del ecosistema de innovación argentino son una mejor coordinación de las intervenciones de la política con el sector privado y el académico, el desarrollo de fuentes de financiación para todas las etapas de los procesos de innovación y desarrollo tecnológico, y el apoyo a la internacionalización de empresas con potencial exportador.

REGIONALISMO ABIERTO E HIDROCARBUROS

UNA de las políticas claves para el crecimiento de la economía argentina es la inserción internacional. En este ámbito tiene sentido un enfoque de regionalismo abierto, gracias al cual el país mire hacia Mercosur y contribuya a su fortalecimiento, apoyando el tratado acordado con la Unión Europea, al tiempo que fortalece sus vínculos co-

merciales con otros países tanto de América Latina como de Asia, convertida en motor del crecimiento y comercio globales.

Brasil es un socio clave para Argentina y será prioritario que ambos países trabajen de manera conjunta para fortalecer las cadenas de valor en las que participan. A pesar de que sus relaciones diplomáticas no han comenzado con buen pie, debería imperar una actitud pragmática, puesto que los dos pueden obtener ganancias por el incremento del comercio bilateral. El ejemplo de Uruguay es interesante: siendo miembro de Mercosur aprobó recientemente un tratado de libre comercio con Chile y está abriendo nuevos mercados en Europa y Asia.

Fernández ha manifestado que los gigantescos yacimientos de gas esquisto y petróleo de Vaca Muerta serán instrumentales para la recuperación de la actividad económica. Este yacimiento tiene un enorme potencial para la obtención de gas (308 trillones de pies cúbicos) y cuenta con cuantiosos recursos de petróleo (16.200 millones de barriles). Además, son reservas únicas en el mundo por encontrarse en un área de baja complejidad geológica y porque pueden explotarse a bajo coste de producción y medioambiental. Mantener las condiciones de los contratos vigentes de exploración y producción y generar incentivos para

una mayor participación de la inversión privada permitirían un incremento de la producción. Esto es fundamental para aumentar el flujo de divisas vía concesiones, exportaciones e impuestos, que dadas las restricciones de financiación exterior de Argentina serían una fuente importante de recursos.

META: REDUCIR LA POBREZA

SEGÚN el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el PIB per cápita de Argentina apenas creció un 1% anual durante el periodo 1983-2018, lo que ocasionó un incremento de la pobreza de ingresos, en torno al 35%. Sin embargo, la pobreza no monetaria –que incluye además el acceso a educación, salud y vivienda– disminuyó durante el mismo periodo, de manera similar a lo que ocurrió en el resto de América Latina. Para reducir la pobreza, una condición necesaria, pero no suficiente, es aumentar el crecimiento económico. El bono demográfico y la expansión de la educación también contribuirán a reducirla, pero no se lograrán avances significativos a menos que el gobierno diseñe e implemente programas focalizados en los segmentos más desfavorecidos de la población.

El Cippec calcula que si el PIB de Argentina creciera a una tasa del

3% anual durante la próxima década –poco probable dada la coyuntura económica actual– la pobreza de ingresos podría reducirse por debajo del 15%. La estrategia del nuevo gobierno debería ser activa y enfocarse en mejorar los aspectos no monetarios de la pobreza a través de un aumento en la cobertura y la calidad de los servicios públicos, principalmente salud, educación y vivienda.

Una señal positiva de que es posible llegar a consensos respecto a las políticas de estabilización macroeconómica y reformas estructurales, han sido las conversaciones impulsadas por Fernández con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina y la Unión Industrial Argentina para delinear un programa económico para la producción y el trabajo. Algunos de los elementos de este programa son alcanzar consistencia macroeconómica con previsión cambiaria y sostenibilidad fiscal y de la deuda pública; acordar mecanismos para estabilizar precios y reducir la inflación; el desarrollo de una política industrial que apunte a mejorar la productividad; reducción de la pobreza a través de mayores niveles de formalización del empleo; inversión en infraestructuras, y desarrollo de capacidades tecnológicas y de capital humano para mejorar la competitividad de

la economía argentina.

Las nuevas autoridades argentinas deberán llevar a cabo malabarrismos complicados, puesto que tendrán que estabilizar la economía (para lo cual es fundamental la re-negociación del acuerdo con el FMI y el resto de los acreedores), implementar un complejo ajuste fiscal, atender las necesidades de la población más vulnerable y sentar las bases para lograr las reformas que permitan un crecimiento inclusivo a medio y largo plazo. No será tarea fácil, pero con el potencial económico con el que cuenta Argentina, si sale bien, las posibilidades de un futuro mejor son reales. ●